



Consejo Económico
y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1997/NGO/82
25 de marzo de 1997

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
53° período de sesiones
Tema 8 del programa

CUESTION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS
SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCION O PRISION

Exposición presentada por escrito por Desarrollo
Educativo Internacional, organización no
gubernamental que figura en la lista

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición, que se distribuye de conformidad con la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social.

[20 de marzo de 1997]

1. En los Principios de Johannesburgo sobre seguridad nacional, libertad de expresión y acceso a la información, conjunto de principios elaborado por expertos jurídicos internacionales, se afirma que el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión no se considerará una amenaza para la seguridad nacional ni será objeto de restricción o sanción alguna. A Desarrollo Educativo Internacional le preocupa sobremanera que el principio de la seguridad nacional o del Estado se utilice de forma amplia y arbitraria en la legislación de varios países, especialmente de Asia. Desarrollo Educativo Internacional considera que ese principio, que suele estar inadecuadamente definido en las leyes pertinentes, puede dar lugar a procesos judiciales arbitrarios y sin las debidas garantías, y observa con preocupación que habitualmente se lo utiliza para menoscabar el derecho a la libertad de expresión y de asociación, y eliminar las opiniones disidentes, sobre todo de los que critican al Gobierno y de las organizaciones sindicales.

GE.97-11273 (S)

2. La seguridad nacional se ha utilizado en todo el mundo para justificar la eliminación del disenso. En los últimos años China ha hecho valer cada vez más este motivo para justificar el enjuiciamiento y el encarcelamiento arbitrario de disidentes, y lo ha incorporado en varias leyes y reglamentos nuevos, como la Ley de seguridad del Estado, de 1993, y la Ley de protección de los secretos de Estado, de 1988. Ese proceso ha culminado en la revisión del Código Penal de China por el Congreso Nacional del Pueblo, aprobada en marzo de 1997, por la que se sustituyen los delitos de "contrarrevolución" por los de "amenaza contra la seguridad del Estado". Como la definición de la "seguridad del Estado" y de lo que constituye un menoscabo de dicha seguridad se deja enteramente a la discreción de los que se encargan de hacer cumplir la ley, Desarrollo Educativo Internacional considera que, lamentablemente, la revisión no implica en realidad cambio sustantivo alguno en la ley o la práctica, ni elimina ninguna de las importantes restricciones al derecho a la libertad de expresión y de asociación. De hecho, la revisión ha dado origen a un clima de mayor represión, que se puso claramente de manifiesto en las graves condenas impuestas a Wang Dan y Wei Jingsheng el pasado año.

3. La figura del delito de "contrarrevolución" se ha utilizado ampliamente en toda la historia del régimen del Partido Comunista Chino. Durante el período de la reforma siguieron aplicándose penas por "delitos de pensamiento", desde el enjuiciamiento de Wei Jingsheng, que fue condenado a 15 años de prisión en 1979; la represión continuó con la condena de los activistas del muro de la democracia en todo el país y culminó con la represión de las protestas de 1989, en la que miles de personas fueron condenadas en todo el país por delitos contrarrevolucionarios. En 1995, Wei Jingsheng fue acusado de "conspiración para derrocar al Gobierno" mediante "delitos" como la "publicación de artículos antigubernamentales en el extranjero", el debate con sus amigos acerca de "la lucha" y la recaudación de fondos para las víctimas de la persecución política y sus familiares, y fue condenado a otros 14 años de prisión.

4. Wang Dan, dirigente estudiantil del movimiento de defensa de la democracia de 1989, fue acusado en virtud del Código Penal y de la Ley de seguridad del Estado de 1993 y, en octubre de 1996, fue declarado culpable de "conspirar para derrocar al Gobierno". Sus "delitos", similares a los imputados a Wei Jingsheng, se reducían al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de asociación, internacionalmente reconocido. Sin embargo, el tribunal calificó esas actividades de "actos delictivos que pusieron en peligro la seguridad del Estado". Wang Dan fue condenado a 11 años de prisión y 2 años de privación de los derechos políticos. Después de una vista de tres horas de duración, en la que no se oyó a ninguno de los testigos a los que la defensa había pedido que se citara, el tribunal suspendió la sesión durante media hora y luego emitió un veredicto por escrito en el que se reproducía casi íntegramente la acusación; a todas luces, el veredicto se había pronunciado de antemano. Wang Lingyun, la madre de Wang, habló en defensa de Wang Dan; su padre y su hermana también estuvieron presentes en la sala del tribunal. No se permitió que ninguno de los demás familiares ni ninguno de los amigos de Wang asistieran al juicio, ni se admitió la presencia de observadores independientes.

5. En los últimos años varias personas han sido condenadas por delitos como "revelar secretos de Estado" y "espionaje" por ejercer sus derechos y libertades fundamentales. En diciembre de 1996 el estudioso chino Li Hai fue declarado culpable de "entrometerse y recoger los siguientes datos sobre personas condenadas por actividades delictivas durante el período correspondiente al 4 de junio de 1989: nombre, edad, estado civil, delito, duración de la condena, lugar de encarcelamiento y trato durante el encarcelamiento". En el veredicto se clasificaba esa información como "secreto de Estado". Li Hai fue condenado a nueve años de prisión y dos años de privación de los derechos políticos. Estuvo incomunicado desde su detención, en mayo de 1995, y un año más tarde se lo acusó de "revelar secretos de Estado" con arreglo a la Ley de protección de los secretos de Estado. Otro caso es el del musicólogo tibetano Ngawang Choepel, que en diciembre de 1996 fue condenado a 18 años de prisión y 4 años de privación de los derechos políticos. Fue acusado de espiar para la "pandilla del Dalai Lama". Se siguen desconociendo las circunstancias del juicio, así como el paradero actual de Choepel. Choepel residía en la India y fue detenido cuando viajaba por el Tíbet para preparar un documental sobre música y danzas folclóricas. No se sabe que haya participado nunca en actividades políticas. En todos esos casos se mencionó como fundamento para el enjuiciamiento la protección de la seguridad del Estado.

6. A Desarrollo Educativo Internacional y su organización asociada Human Rights in China les preocupa el hecho de que con la revisión del Código Penal se haya ultimado la transformación de China en un "Estado de seguridad nacional", que se inició con la Ley de seguridad del Estado de 1993 y la Ley de protección de los secretos de Estado de 1988 y su Reglamento de aplicación de 1990. Según la Ley de seguridad del Estado y su Reglamento de aplicación, entre los actos que ponen en peligro la seguridad del Estado figuran la conspiración para derrocar al Gobierno, la división del país y la subversión del sistema socialista. La definición de esos actos se deja a la discreción de las autoridades. Además, antes de promulgarse la revisión del Código Penal, la pena por los delitos incluidos en la Ley de seguridad del Estado debía determinarse remitiéndose a la parte correspondiente del Código Penal, es decir, a la sección sobre los delitos contrarrevolucionarios. Tampoco los secretos de Estado están definidos en la ley. La Ley de protección de los secretos de Estado y su Reglamento de aplicación no contienen procedimiento alguno para determinar si un asunto es secreto de Estado. Además, esos instrumentos delegan en las autoridades la facultad de determinar el nivel de los secretos de Estado y de decidir independientemente los asuntos que deben clasificarse como tales. Ninguno de esos instrumentos prevé un sistema válido de revisión judicial para el caso de que se impugne la decisión oficial de los actos que constituyen una amenaza para la seguridad del Estado o un secreto de Estado. Así pues, la Ley de seguridad del Estado y la Ley de protección de los secretos de Estado son efectivamente dos capítulos adicionales de los delitos contrarrevolucionarios. La eliminación del delito de "contrarrevolución" sin la modificación de esos dos instrumentos legislativos y sus reglamentos de aplicación no es más que un artificio legal.

7. Desarrollo Educativo Internacional desea hacer contrastar el principio de la seguridad del Estado, vago y oportunista desde el punto de vista político, con los Principios de Johannesburgo, en que los legítimos intereses de la seguridad nacional se definen como la protección de la existencia de un país o de su integridad territorial contra el empleo o la amenaza del empleo de la fuerza por una fuente externa, como una amenaza militar, o interna, como la incitación a derrocar al Gobierno por medios violentos. En los Principios se considera ilegítimo imponer restricciones para evitar que el Gobierno se encuentre en situaciones embarazosas o que se revelen infracciones, defender determinada ideología, ocultar información sobre el funcionamiento de los organismos públicos o reprimir actividades sindicales. En los Principios se establece asimismo que no deben imponerse restricciones a la información relativa a las prácticas de derechos humanos de un país utilizando como justificación la "seguridad del Estado".

8. Desarrollo Educativo Internacional y su organización asociada Human Rights in China instan al Gobierno de China y al Congreso Nacional del Pueblo a proceder a una verdadera revisión del Código Penal basada en las normas de los Principios de Johannesburgo sobre seguridad nacional, para permitir el mayor grado posible de libertad de expresión e información, al tiempo que se protejan tan sólo los legítimos intereses de la seguridad nacional. Si bien la libertad de expresión está supuestamente garantizada en la Constitución china, ese derecho también debe reconocerse en la práctica. Además, Desarrollo Educativo Internacional y Human Rights in China recomiendan que el Congreso Nacional del Pueblo derogue la Ley de seguridad del Estado de 1993 y su Reglamento de aplicación, y que enmiende a fondo la Ley de protección de los secretos de Estado de 1988 para incorporar salvaguardias de los derechos fundamentales.

9. Desarrollo Educativo Internacional pide a todos los gobiernos que mantengan presas a personas por haber ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de asociación, con la justificación de "proteger la seguridad nacional", a que las pongan en libertad inmediatamente y sin condiciones. También recomienda encarecidamente que los intereses de la seguridad nacional se definan de manera estricta en todos los países y que cualquier restricción a la libertad de expresión o de información fundada en la protección de la seguridad nacional sea clara y pueda impugnarse mediante la revisión por un tribunal independiente.
